

Los Niños Abandonados y el Estado

por Sebastián Salazar Bondy

El caso de los cuatro negritos abandonados que ocupara durante la pasada semana la primera página de nuestro diario ha dado oportunidad para revelar con cifras y porcentajes abrumadores la magnitud del problema del desamparo infantil y juvenil que afecta a nuestra ciudad y, en más amplia escala, a todo el país. He allí, en datos precisos y evidencias incontestables, el fruto de la desorganización social que reina entre nosotros y ante la cual solamente los ciegos o los insensibles pueden permanecer indiferentes. Ningún caldo de cultivo más propicio a la delincuencia, la corrupción y la quiebra nacional que el desamparo material y moral en que viven aquellos desdichados, cuyo destino es desde el origen incierto. La proliferación en calles y plazas de los menores de edad que ejercen la mendicidad—desembozada u oculta tras la venta de loterías o cualquier otra mercadería—, de los pequeños vagabundos, de los raterillos—los famosos “pájaros fruteros” del Mercado Mayorista—, de las pandillas agresivas, de los prematuros deshechos humanos que estamos acostumbrados a encontrar por todas partes, son testimonios de una disolución social cuyo estallido puede ser desastroso a corto plazo.

La Constitución señala con toda claridad los deberes del Estado para con la niñez: la obligación de velar porque todas las garantías de salud, moral y educación rodeen y protejan al hombre desde que nace hasta que se hace ciudadano es una de las bases del régimen democrático, y mientras tan importante, deber de gobierno esté, como está hoy en el Perú, descuidado no podemos afirmar que vivimos bajo el imperio de la ley, dentro de un orden civilizado. La Democracia—habrá que repetirlo hasta el hartazgo— es

un sistema absoluto y no es posible que ella se dé parcialmente. Cuando nuestros políticos aseguran que nuestro país se desenvuelve por los cauces democráticos olvidan sin duda que si falta la igualdad de oportunidades para todos—y a partir de la infancia— el sistema no prevalece y que, por ende, está sien-



do traicionado en uno de sus fundamentos doctrinarios. ¿No es acaso de la más refinada extracción absolutista que un niño venga al mundo con la marca estigmática de la ilegitimidad, que sus primeros hambres sean satisfechos con mendrugos, que carezca de ropa y techo, que no tenga ocasión de ir a una escuela donde se le enseñe a vivir, que sea lanzado a la calle a buscarse las subsistencias de cualquier modo, que sea pasto de las enfermedades contra las cuales nadie lo proveyó de defensa alguna, que sea la cárcel el destino que la sociedad le depara, que su existencia sea una desigual apuesta contra el dolor y la muerte? El instinto de vivir es capaz de hacer de un ángel un monstruo, no lo olvidemos.

Alguien le ha reprochado al que esto escribe haber, en otros artículos sobre temas semejantes, eximido a los jóvenes delincuentes de su directa responsabilidad ante los atropellos que cometen, atribuyéndosela totalmente, en cambio, a la sociedad, y eso parece ser una barbaridad jurídica. Tal vez lo sea desde ese punto legal. Pero moralmente ello es una verdad. El alto índice de niños abandonados—para verificar el cual no es necesario acudir a las estadísticas, sino realizar una simple encuesta entre los innumerables chicos que en la vía pública y en los cafés nos asaltan pidiendo limosna u ofreciendo sus servicios— demuestra que hay un semillero de futuros desadaptados y criminales, que mientras son párvulos e impúberes no tienen culpa de nada, ni de su nacimiento irregular, ni de la miseria de sus progenitores, ni de la ausencia de una eficaz acción estatal que reemplace con maestros y tutores a los padres de que carecen. El hogar no es deseable simplemente por razones sentimentales: en él, en una comunidad consciente de la importancia de la formación de los hombres que la integran, se modela al ciudadano, se le da sentido, y el colegio, después, es sólo el complemento de esa pedagogía natural que emana del ejemplo paterno y del consejo adulto.

Son felizmente muchas las voces de alarma que se vienen levantando con respecto a este grave drama de la infancia desamparada: la Iglesia, los educadores, los periodistas, los sociólogos, han reclamado ya una mejor atención a esas masas de niños que prometen una ciudadanía desquiciada. El Estado no parece oír, pero su sordera no puede durar mucho tiempo, salvo que sea intencional.